

En Costa Rica, los firmantes del Pacto por los ODS participamos en la construcción de la Hoja de Ruta, enfocada en establecer las metas y anotar lo que cada actor hace por su cuenta. Pero nunca se pudo discutir sobre la pertinencia, evaluación y coherencia de las políticas públicas para el avance de los ODS.

Hay muy pocas áreas de avance significativo, y son resultado de la misión tradicional de las entidades públicas, y no por acción proactiva del Gobierno hacia las metas, teóricamente correctas, pero sin vínculo ni respaldo en políticas públicas, presupuesto y voluntad política para su logro.

La política gubernamental es de desinversión social, la legislación recorta derechos fundamentales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y seguridad social. El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo.

La salud política, democrática, económica y social del país se ha agravado a pesar de datos teóricos generosos aportados en el informe para invisibilizar la realidad que vive la población y muchos grupos vulnerables respecto a los ODS reportados. La acción gubernamental se realiza con una visión ultraliberal que aleja al país del logro de los ODS, y provocará la década perdida de la acción.

¿Por qué la sociedad civil, la academia y los sindicatos están excluidos de analizar, discutir y evaluar las políticas públicas gubernamentales, para su rendición de cuentas y en su pertinencia e impacto a favor de los ODS?

¿Por qué el gobierno no ha vinculado en sus políticas el ODS 8 con el 1 y el 2, cuando el empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre?

¿Por qué actores claves no son integrados en los procesos de diálogo para la transición justa y el cambio climático?